

Interpretación global del proceso histórico

“15 de octubre de 1979-28 de marzo de 1982”

Tomás R. Campos

RESUMEN

Este artículo pretende dar una interpretación global del proceso, que transcurre entre el 15 de octubre y el 28 de marzo, aunque tiene en cuenta lo que ha sucedido durante los tres meses siguientes a las elecciones. Presupone muchos análisis anteriores y por eso multiplica las citas, que sustentan las opiniones vertidas en él. Trata de ofrecer una visión de conjunto mezclando el método de tener presente el recorrido entero del proceso y el método de puntualizar algunos de los elementos definitorios del mismo. Parte de lo que pretendió ser objetivamente el 15 de octubre, entendido como proceso más que como acción buscada expresamente por agentes determinados; analiza a continuación la respuesta que recibió de inmediato, la cual se sitúa en tres posiciones fundamentales. Atiende inmediatamente a la internacionalización del conflicto, que convierte un problema predominantemente social y nacional en un problema sujeto a los intereses internacionales, especialmente de Estados Unidos. Prosigue el estudio con una caracterización del proceso analizando su militarización, su carácter represivo, su reformismo, la descomposición del ordenamiento constitucional y jurídico, su norteamericanización, la desinformación sistemática y la conducción minoritaria y partidista. Sigue una clasificación de los resultados del proceso: guerra civil, violación de los derechos humanos, deshumanización, descalabro económico, pérdida de la soberanía nacional, implantación de reformas, elecciones, consolidación y maduración del movimiento revolucionario. El trabajo acaba tratando de extraer conclusiones, que parecen deducirse del proceso mismo: fracaso de la solución intermedia, imposibilidad de la toma del poder por la vía de la revolución armada, imposibilidad de un triunfo militar por parte de la FA, complejidad de las fuerzas sociales en litigio, necesidad de presencia en la solución del movimiento revolucionario y del capital, necesidad de la presencia de los sectores democráticos y, sobre todo, la necesidad de terminar con la guerra de un modo predominantemente político y no militar.

El periodo transcurrido entre el golpe de estado, que derribó al General Romero el 15 de octubre de 1979 y las elecciones tenidas el 28 de marzo de 1982 constituye una cierta unidad y constituye, sobre todo, una etapa importante en el proceso histórico salvadoreño. Pocas veces, si alguna, se habrán puesto en juego en nuestro país tantas cosas y tan esenciales. El proceso no ha terminado, pero el periodo encerrado tras esas dos fechas ha puesto en marcha dinamismos y problemas, ante los cuales es necesario reflexionar. Es lo que se va a pretender hacer en este trabajo de una manera más sintética que analítica, pues, supone no sólo todos los artículos sectoriales que le anteceden en este número de la Revista sino otros muchos que nuestra publicación ha ido presentando durante estos dos años y medio y que se irán citando a lo largo de los distintos párrafos.

1. La pretensión del "15 de octubre"

Al buscar la determinación de lo que buscaba el "15 de octubre" no es lo más importante preguntarse quiénes dieron el golpe, cómo lo dieron o qué buscaban con él. Nuestra hipótesis es que el "15 de octubre" fue el resultado de condiciones objetivas más que de voluntades personales o grupales. Pudieron ser unos u otros los que intentaran sacar al país de la crisis profunda en la que se encontraba, pero el intento era inevitable tanto por la presión de los hechos mismos como por el reflejo de esa presión en fuerzas sociales y políticas dentro y fuera del país. Y es que en el fondo el "15 de octubre" fue un intento para superar la crisis profunda en que había entrado la estructura económica y socio-política del país, que ya entonces se encontraba en trance de descomposición y aun de guerra civil. Un mes antes de que se diera el golpe de Estado, nuestra revista titulaba uno de sus editoriales en esos términos (*Al borde la guerra civil*, 1979, p. 735). Los síntomas en efecto, eran claros y graves, y en su conjunto constituían una situación estructural y coyuntural intolerable. Las características de la situación entonces podían sintetizarse del siguiente modo:

a) Incapacidad del ordenamiento económico vigente y de sus agentes principales para responder de una manera mínimamente satisfactoria a las necesidades básicas de la mayoría de la población, de suerte que

podía hablarse con toda exactitud de injusticia estructural, que lejos de superarse llevaba a un acelerado empeoramiento (Mayorga Quirós, 1977, p. 69-90; Menjivar, 1977).

b) Resistencia violenta de los poderes dominantes a aquellos cambios reformistas, que pudieran traer consigo un mejoramiento paulatino de la estructura económica y una superación de la injusticia estructural (ECA, 1976; Ellacuría, 1976, p. 747-758; de Sebastián, 1976, p. 759-772. A sus órdenes, mi capital, 1976, p. 637-643).

c) Imposibilidad de que las fuerzas políticas opositoras llegaran al poder por la vía democrática (Baltodano, 1973; Los trágicos acontecimientos de abril y mayo, 1977, p. 321-345).

d) Un poderoso movimiento revolucionario, que se había ido gestando y organizando con gran fuerza desde 1979 y que a la altura de 1977 contaba ya con un gran poder de masas y con un incipiente poderío militar (Anderson, 1978; Menjivar, 1979; Análisis, 1971; Hernández, 1981; Campos, 1978).

e) Una estructuración del ejército con su correspondiente cúpula militar, el cual ha sostenido por la fuerza una situación injusta y antipopular (Guidos, 1980; Mariscal, 1978, p. 9-27; Campos, 1979, p. 477-488; Andino, 1979, p. 615-630).

f) Aumento cuantitativo y cualitativo de la represión y de la violación generalizada de los derechos humanos como método fundamental para impedir la organización popular y, en general, toda manifestación de descontento popular (Informe del Departamento de Estado de EE.UU., sobre derechos humanos, en Centroamérica y Panamá, 1979, p. 365-368; Informe OEA sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, 1978; Ungo, 1979, p. 489-506).

g) Una aguda crisis política (Guidos, 1979, p. 507-526), que llevó a distintos tipos de solución como la propuesta del Diálogo Nacional por el General Romero, la oferta apremiante de elecciones anticipadas por parte de Estados Unidos, la constitución del Foro Popular, las movilizaciones de masas, etc. (*La UCA y el diálogo nacional*, 1979, p. 381; *Plataforma común del Foro Popular*, 1979, p. 843-845).

h) En el plano internacional, por lo que se refiere más directamente a la situación salvadoreña, se contaba con el reciente triunfo de la revolución sandinista que reafirmaba ciertas posibilidades. Por otro lado, la política de derechos humanos de Carter también favorecía ciertos tipos de acción reformista.

Todo este cúmulo de condiciones presionaba en favor de una solución que ya no la podía ofrecer el gobierno del General Romero, pero tampoco la ideología y la política económica y social sustentada por dicho gobierno y los anteriores. Había espacio real para diversos intentos y el que prosperó fue el de la Juventud Militar, fraguado a lo largo de todo 1979. La Proclama del movimiento muestra tanto la apreciación que tenían de la situación como las líneas generales, con que pretendían resolverla (Proclama, de la Fuerza Armada de El Salvador. Emitida día 15 de octubre de 1979). No es cuestión de analizar ahora ni las posibilidades que tenía el movimiento, ni las expectativas que despertó, ni las razones de su fracaso (Pronunciamiento del Consejo Superior Universitario de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas sobre la nueva situación del país tras el quince de octubre, 1979, p. 849; La superación de un 15 de octubre fracasado, 1980, p. 929). Lo que nos importa sobre todo es caracterizar lo que fue inicialmente el intento del 15 de octubre, no tanto en la voluntad de sus gestores como en el dinamismo objetivo de las medidas puestas en marcha. Las siguientes pueden considerarse como las más fundamentales:

a) Buscar el apoyo de fuerzas reformistas, honestas, capaces y no radicales, con las cuales podrían quedar fuera del poder político y, en un principio también fuera del poder militar, sectores oligárquicos o pro-oligárquicos, pero también sectores revolucionarios, sobre todo los sectores revolucionarios con estructura militar.

b) Rehacer la imagen del estamento militar y de su correspondiente gobierno con la implantación de una nueva política de derechos humanos y de unos dirigentes militares y políticos, que no pudieran ser acusados de complicidad con las injusticias y fracasos, con los engaños y corrupciones de regímenes pasados.

c) Preparar aquellas medidas socio-económicas y también militares, que quitaran fuerza y poder a los sectores oligárquicos, pero también a los movimientos populares, mediante un programa de reformas y de acciones militares, que consiguieran un apoyo popular y una salida a la crisis económica y política.

d) Basar la conducción del proyecto en el estamento militar como garantía última del mismo y como instancia definitiva en cualquiera de las situaciones que se pudieran presentar. Nunca se quiso poner en peligro el papel hegemónico de la Fuerza Armada, dando por supuesto que estaba en capacidad de dirigir el proceso en cuanto proceso político, aunque dejara a los civiles los aspectos técnicos del mismo.



e) Ideológicamente predominaba en el movimiento un anti-comunismo simplista.

f) Contar con Estados Unidos, primero como fuerza permisiva del movimiento y pronto como garante último de las necesidades económicas de las reformas y, un poco más tarde, de las necesidades militares, que pudieran presentarse en el combate contra las fuerzas revolucionarias a mediano plazo.

2. La respuesta inicial al 15 de octubre

No tratamos aquí de contar las vicisitudes que tuvo el movimiento del 15 de octubre ni, por tanto, de hacer una crónica explicativa de los sucesos. Pretendemos más bien señalar sistemáticamente las respuestas dadas a medida que mostró cuáles eran sus opciones básicas.

La primera respuesta fue la de las organizaciones político-militares, las cuales, después de unas primeras indecisiones, debidas tanto a que el golpe las tomó de improviso como a las divisiones tan fuertes existentes entre ellas, tomaron una postura casi frontalmente contraria, incluso respecto de una primera Junta, con la cual se había prestado a colaborar el Foro Popular. Es cierto que hubo cierta colaboración directa no sólo de quienes luego se alistarían en el FDR, los cuales entraron de lleno en el Gobierno, sino también de quienes entonces o más tarde eran o son del FMLN, entonces todavía no constituido como tal, pero cuyos grupos integrantes estaban en plena actividad. Pero, en el fondo, hubo un rechazo por dos razones fundamentales: primera, porque esos grupos pensaban que en un término relativamente corto de tiempo podrían alcanzar el poder por sus propias fuerzas, que ya para entonces habían puesto en serio trance la estabilidad del gobierno de Romero; segunda, porque en el intento reformista, tercerista si se quiere, de la Primera Junta, vieron una amenaza para su triunfo, pues las masas populares podrían encontrar en la vía reformista un camino más fácil y rápido que en la vía estrictamente revolucionaria. Como se ha repetido después, no se consideraron entonces lo suficientemente fuertes y consolidados como para aceptar el desafío de un gobierno reformista, honesto y eficaz. Consecuentemente se decidió su desestabilización, sobre todo al aflorar las medidas represivas contra lo que eran estrictamente organizaciones populares revolucionarias.

La segunda respuesta fue la de la oligarquía. Aparentemente el sector más retrógado se replegó en un primer momento; precisamente el sector que se había lanzado furiosamente contra las medidas reformistas del Coronel Molina. Pero el sector del capital y de la empresa privada más progresista, en vez de abandonar el campo de lucha, buscó inmediatamente estar representado en la propia Junta y también en los ministerios de mayor alcance económico. La empresa privada pareció estar de acuerdo con separarse de la política de los gobiernos anteriores y entrar, de momento, en el juego de las reformas y de un mayor respeto de los derechos humanos. Pero el sector predominante del capital no aceptó el cambio. Como primera medida acrecentó su práctica habitual de sacar su dinero al exterior; inmediatamente buscó como influir sobre los militares de mayor graduación y antigüedad; finalmente propició e intensificó las prácticas represivas, que ya había desatado durante todo el año 1977, tras su triunfo contra los entonces patrocinadores de la Transformación Agraria.

La tercera respuesta fue la de los sectores progresistas, quienes pensaron que el programa del nuevo gobierno, la honestidad y capacidad de muchos de quienes tenían posiciones relevantes en él y el cambio de faz en el estamento militar con el acceso de la Juventud Militar podría lograr el milagro de una autodepuración del ejército, el cual de aquí en adelante sería guardián de la democracia, de las transformaciones sociales y de los derechos humanos. A amplios sectores políticos, sociales y laborales (Foro Popular) y a amplios grupos de la población, les pareció que podía salirse del atolladero nacional por una vía media, que no fuera ni extremadamente capitalista ni extremadamente socialista. Unos pensaban que esto era suficiente para empezar a resolver los problemas del país mediante profundas reformas estructurales, junto a las cuales ya no se daría represión alguna; otros pensaban que con esta solución se abría una etapa de transición, en la cual el pueblo organizado podría consolidarse y acercarse cada vez más a disfrutar del poder económico y del poder político.

Recordar hoy estas tres posiciones fundamentales, dentro de las cuales había, sin duda, matices e intenciones diversas, es importante. En los últimos meses de 1979 el pueblo políticamente activo de El Salvador estaba dividido en esos tres frentes. Es un dato que no debe olvidarse a la hora de preguntar sobre la división actual de ese mismo pueblo políticamente activo.

3. La internacionalización del conflicto

La misma existencia de esos tres frentes, cada uno de ellos con sus propios intereses y con sus propias bases sociales, hizo que el 15 de octubre, en vez de terminar con el conflicto, al cual quería dar solución, lo agudizara. Lo que hasta entonces fue un conflicto limitado en sus manifestaciones más extremas se convirtió en un conflicto cada vez más extendido y más profundo. Pero lo que no puede negarse es que, en esos momentos, el conflicto era de carácter predominantemente salvadoreño, lo cual no significaba que fuera exclusivamente salvadoreño. Por parte del movimiento revolucionario y del movimiento anti-revolucionario era un estricto conflicto de clase, en el cual la disputa principal era quién se iba a quedar con el poder económico, militar y político de El Salvador: las clases dominantes oligárquicas o las clases oprimidas organizadas en los distintos grupos, que más tarde darían lugar al FMLN, pero que ya entonces fungían como

FPL, ERP, RN y PC. Esto quiere decir que se trataba fundamentalmente de un conflicto interno, cuyo detonante principal y cuya fuerza fundamental era la injusticia social y estructural, la existencia de millones de salvadoreños en condiciones de vida inhumana y la existencia de unas minorías que, no sólo lo tenían casi todo, sino que luchaban denodadamente para que nada de lo que había sido fundamental hasta entonces cambiara fundamentalmente. Igualmente quienes se apiñaron en torno a la solución inicial del 15 de octubre fueron movidos también por afanes y por problemas predominantemente nacionalistas, predominantemente salvadoreños.

No sólo el problema era en un primer momento estrictamente salvadoreño. También lo eran las soluciones propuestas. La oligarquía se fue a la lucha con sus antiguas armas autóctonas: su poder económico y su influjo sobre el estamento militar, su capacidad de hacerse justicia por su mano y su capacidad de aterrorizar a sus adversarios. El movimiento revolucionario ma-



La guerra civil en El Salvador
Un «caso fácil» para que Reagan enfrente a los rusos

nejaba sobre todo la organización popular hasta lograr uno de los movimientos de masa cualitativa y relativamente más importante en toda la historia de América Latina. También los sectores más sanos del gobierno de la primera Junta estaban pensando en soluciones nacionalistas, que pudieran hacer de El Salvador un país efectivamente no alineado en política exterior y que deseaba relaciones políticas y económicas con los países tanto del bloque capitalista como del bloque socialista; se buscó desde el primer momento, por poner un ejemplo, tanto relaciones con el gobierno sandinista (el saludo a la revolución sandinista en la propia Proclama fue retirado en el último momento) como amistosas, pero dignas relaciones con el gobierno norteamericano.

No obstante, siendo esto así, el conflicto se internacionalizó inmediatamente. La responsabilidad primera de esta internacionalización ha de ponerse en manos de Estados Unidos y de quienes en el interior se consideraban como radicalmente anti-comunistas. En este comienzo de internacionalización, que llevó a una rápida y creciente intervención de Estados Unidos, tuvo un gran peso el triunfo de la revolución sandinista y el rumbo tomado rápidamente por dicha revolución. Tras el derrocamiento de Somoza, quien había sido el gendarme principal de la zona, el aliado fiel de Estados Unidos y la creciente toma del poder total en Nicaragua por los sandinistas, los norteamericanos decidieron poner la frontera contra los avances regionales del movimiento revolucionario en El Salvador, precisamente porque han visto en nuestro país el lugar con condiciones intrínsecas más favorables para el triunfo de una revolución de tinte marxista. No sólo eso, sino que, paulatinamente han enfocado el problema salvadoreño como un problema de confrontación Este-Oeste. Lo que Estados Unidos entiende como avance de la Unión Soviética en Cuba y Nicaragua, en Jamaica y Granada, trata de detenerlo en El Salvador para asegurar de forma total la zona del Caribe como zona de seguridad económica, política y militar propia. El cambio no se realizó de un día para otro, la internacionalización del conflicto que en un primer paso fue una franca norteamericanización ha ido cobrando paulatinamente mayor fuerza. El conflicto salvadoreño ya no es primariamente un problema salvadoreño; es, al menos para los norteamericanos, un problema norteamericano (Aguilar, 1980, p. 225-240; Montgomery, 1980 p. 241-252, (a); 1980, p. 839-848 (b);

Connor, 1980 p. 585-891; Marchetti, 1981 p. 867-888, Studds, 1981, p. 675-691; Enders, 1981, p. 716-719, Hinton, 1981; Symposium Stanford University, 1981; Campos, 1981, p. 383-414; González, 1981, p. 1109-1122). Y un problema norteamericano planteado dentro del esquema general de la confrontación Este-Oeste, que deja muy en segundo lugar los intereses de los salvadoreños como pueblo y como nación, y deja también muy atrás la autodeterminación del pueblo salvadoreño.

Desde esta perspectiva, lo que pretende primariamente Estados Unidos en El Salvador es la aniquilación inmediata de aquellos grupos políticos-militares, que ellos estiman la avanzada del Este en su confrontación con los intereses norteamericanos. Si la Administración Carter no fue la que inició la escalada militar propiamente dicha, pues lo que hizo fue responder militarmente a la amenaza de la ofensiva general que inició el FMLN en enero de 1981, la Administración Reagan ha sido la responsable principal de que las acciones militares hayan tomado el peso principal en el conflicto salvadoreño. Para probarlo basta con recordar las enormes sumas de dinero y de apoyo militar que Reagan ha proporcionado al Gobierno salvadoreño en estos dos últimos años (González, 1981; p. 1109-1122), las reiteradas confesiones de Haig y otros altos jefes del Departamento de Estado, según las cuales la ayuda militar norteamericana es indispensable para que no triunfe militarmente la guerrilla salvadoreña, las afirmaciones de Duarte y altos militares salvadoreños en este mismo sentido y las declaraciones, por ejemplo, del presidente de ANEP, quien recientemente ha vuelto a repetir que si Estados Unidos corta la asistencia militar, prácticamente "nos estaría colocando en manos de la Unión Soviética" (*El Diario de Hoy*, 9 de julio, 1982, p. 56).

También pretende Estados Unidos evitar el colapso económico de El Salvador, pero tal como lo confiesa con el fin de que la desesperación no lleve a la población salvadoreña a apoyar masivamente al FDR-FMLN; de ahí su abundante ayuda económica. Y finalmente pretende Estados Unidos cambiar paulatinamente la estructura económica de El Salvador por considerarla oligárquica e injusta, pero sobre todo porque estima, que si no es cambiada va a ser una causa permanente de desasosiego social, campo propicio para empeños revolucionarios.

Un segundo factor de internacionalización

lo representan Cuba y Nicaragua. En un primer momento Cuba y Nicaragua pensaron que en El Salvador se daban las condiciones objetivas inmediatas para el avance del movimiento revolucionario, con lo cual podrían contar a su favor con un nuevo gobierno en el área. Después de un corto compás de espera, que sirvió para darse cuenta de la dirección real tomada por el movimiento de la Juventud Militar del 15 de octubre, Cuba y Nicaragua determinaron que el FMLN debiera ser favorecido como una solución mejor para su línea política y, además, viable a corto plazo. Ni Cuba ni Nicaragua, ni la Unión Soviética son los responsables principales o determinantes del movimiento revolucionario salvadoreño, sino que lo son las condiciones objetivas de injusticia estructural y el surgimiento de organizaciones revolucionarias fundamentalmente autóctonas, aunque de ideología marxista. Pero Cuba y Nicaragua intervienen ayudando al movimiento revolucionario, aunque en mucha menor medida de lo que lo ha hecho Estados Unidos con la segunda junta y con el actual gobierno salvadoreño. Si los revolucionarios recibieran la ayuda norteamericana y los gubernamentales la ayuda cubano-nicaragüense, es del todo evidente, que los revolucionarios estarían ya en el poder.

Un tercer factor de internacionalización lo representan aquellos países y organizaciones políticas internacionales, que se dieron cuenta de la gravedad del proceso salvadoreño y que, mirando por la salvaguardia de la paz en la región y últimamente por la paz mundial, intentaron lograr para el conflicto salvadoreño un tipo de solución que no fuera estrictamente militar. El paso más llamativo en esta línea lo dieron los Gobiernos de México y Francia (Ellacuría, 1981, (c), p. 845-866). Pero también la ONU y la OEA consideraron, aunque desde perspectivas distintas, el problema salvadoreño como un problema internacional, que afectaba o podía afectar a la paz mundial (Campos, 1982, p. 17-66).

Hasta el momento lo que se aprecia más es una regionalización del conflicto bajo la dirección de Estados Unidos. Las acusaciones probadas de un claro intervencionismo militar hondureño en la batalla de Morazán en los primeros días de julio de 1982 y la respuesta del movimiento revolucionario con la importante acción de sabotaje que afectó seriamente las plantas generadoras de energía eléctrica en Tegucigalpa son prueba del peligro inmediato de regionalización

del conflicto salvadoreño. Al ser parecidos los problemas que afrontan El Salvador y Guatemala, se están dando también soluciones semejantes por parte de Estados Unidos y los respectivos gobiernos. Bajo el patrocinio de Estados Unidos se busca una salida por el camino de las elecciones junto con el reforzamiento de los ejércitos de la zona (Tzur, 1982, p. 259-270). Por otro lado, el relanzamiento de la Comunidad Democrática Centroamericana, a la que se ha invitado a participar a Guatemala, que con el General Efraín Ríos Montt al frente, está lanzando a una solución militar del problema guatemalteco, vuelve a probar la unidad de propósito en la política que se quiere imponer en el área contra el fortalecimiento del gobierno sandinista de Nicaragua y contra el desarrollo de los movimientos revolucionarios.

Lo que empezó siendo un conflicto de cada una de las naciones centroamericanas, especialmente de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, se está tornando cada vez más en un conflicto regional cuya solución está hegemonizada por la Administración Reagan y cuyo interés fundamental es frenar lo que piensa ser el expansionismo soviético sin importarle mucho lo que este freno pueda suponer en costos humanos al área centroamericana. No se estudia el problema centroamericano en y por sí mismo, no se mira principalmente por los intereses regionales, sino que, se subordina todo a la estrategia mundial de Estados Unidos, que, en el conflicto de las Malvinas ha demostrado claramente no ser una estrategia panamericana y mucho menos latinoamericana. El problema salvadoreño tiene dimensiones regionales y aun continentales; de ahí que sean muchas las fuerzas con derecho a participar en él. Pero es sobre todo problema de El Salvador, en el cual los salvadoreños deben tener la última palabra y la iniciativa fundamental.

4. Características fundamentales del proceso

Nos proponemos dar en este apartado una serie de características del proceso, que si no lo definen en su totalidad y profundidad, son suficientes para el propósito interpretativo y práctico de estas líneas, con la ventaja, además, de referirse a características verificables y no tanto a características teóricas más iluminativas tal vez, pero también más discutibles.

El proceso del 15 de octubre no se decanta en su curso verdadero hasta la instalación de la

segunda junta. La primera junta a la cual se adhirió el Foro Popular y en la que al principio no tenía el mando militar total, quienes después lo acabaron teniendo, puede considerarse como una vía reformista, que pretendía no caer en lo que después cayó la segunda junta, bajo cuyo mandato se dan las características que acabará tomando el proceso. Tal vez esas características estaban ya en germen durante la primera junta, pero entonces eran más bien posibilidades que realidades. Como quiera que sea, cuando los que estaban en el gobierno de la primera junta y eran reformistas no anti-revolucionarios, no represivos, se dieron cuenta de que predominaba la tendencia represiva sobre la reformista, se retiraron del poder. Lo hicieron en dos pasos, primero los que no eran demócratas cristianos y pocos meses más tarde los jóvenes demócratas cristianos, cuando comprobaron desde dentro del gobierno nuevo la hegemonía del grupo y de la política represiva (Golsztein, 1980). Por tanto, intentamos caracterizar el proceso como un todo, esto es, tomado en su conjunto y visto desde su final provisional.

a) La **militarización** es una de las características que ha ido tomando cada vez mayor importancia. Ya el golpe del 15 de octubre fue un golpe militar, aunque en su iniciación y organización intervino decisivamente un grupo de civiles. Pero este carácter no sólo militar sino militarista fue acentuándose, de suerte que Estados Unidos y los militares, el Alto Mando en concreto, se convirtieron de inmediato en la fuerza dominante y hegemónica del proceso. Los métodos utilizados para preservar esta hegemonía no fueron desde el primer momento de tipo bélico, aunque fue la amenaza de la fuerza militar lo que les mantuvo en el poder y lo que les permitió conducir el proceso político, al menos en sus líneas generales; lo que les permitió distribuir el poder entre los distintos sectores sociales. Pero también —y desde un comienzo— aunque de forma acelerada, tras el ascenso de la segunda junta, se empleó la fuerza militar para la represión. Una represión que empezó ejerciendo contra las grandes manifestaciones populares, pero que se fue volviendo cada vez más compleja hasta convertirse en la más feroz represión cuantitativa y cualitativa, conocida en la historia de El Salvador. Los militares impusieron la solución del 15 de octubre, pero sobre todo, los militares decidieron también en qué debía consistir la solución del 15 de octubre, siempre acompañados y, en

definitiva, dirigidos por Estados Unidos.

También se militarizó aceleradamente la respuesta del movimiento revolucionario. Casi todos los grupos, aunque con distinta intensidad y diferentes cualificaciones, sostuvieron desde un principio que sólo el pueblo armado podría sacar adelante la revolución. No es que estos grupos desconfiasen del derecho y del poder de las masas para alzarse con el triunfo, pero suponían que este derecho y este poder no iban a ser eficaces, más que si se armaban, supuesto que el enemigo iba a contar con las armas del ejército para impedir los avances revolucionarios. Cualquiera que fuera la teoría explicativa adoptada, es un hecho que el movimiento revolucionario decidió acelerar su armamentización y poner su confianza práctica mayor en la fuerza de las armas. 1980 fue todavía un año de masas, un año en el cual las masas salieron a la calle y se prestaron a las movilizaciones, a las huelgas y a ciertas formas de insurrección. Pero para finales de ese año ya se había decidido la necesidad de acudir a las armas. La entrada de 1981 y los meses que han seguido han sido testigos de un creciente desarrollo del poderío militar y del accionar bélico del FMLN. No se desdeñó la presencia de lo político en las propias organizaciones político-militares, ni siquiera en la actividad relativamente autónoma del FDR, pero en la práctica fue lo militar lo que se ha llevado la parte del león en la actividad de los grupos revolucionarios.

Estados Unidos, por su parte, hizo del triunfo militar y del accionar bélico elemento principal de su política en El Salvador. Mientras habla de soluciones políticas, lo que más ha hecho es impulsar el poderío militar de la Fuerza Armada, ante todo para que ésta no fuera arrollada por sus contrarios, pero también para propiciar un triunfo militar que consistiera, al menos, en un ahogamiento primero de la guerrilla y en su posterior aniquilamiento.

b) Como uno de los factores de la militarización del conflicto, pero con autonomía y peculiaridad propia está el problema de la represión y, más en general, de la violación de los derechos humanos. Una situación tal que ha obligado a los propios dirigentes gubernamentales a hablar de un terrorismo de derechas y a organismos internacionales tales como la OEA a hablar de un terrorismo de Estado (Informe anual de la Comisión Interamericana, 1982, p. 122); Informe del Consejo Económico y Social de la ONU, 1982, p. 104-118). Con ocasión del CXV Aniversario de la



Policía Nacional, el Director General de ese cuerpo habló de 4.353 asesinatos políticos presuntamente atribuidos a la izquierda marxista desde 1968. Aun aceptando esa cifra tendríamos que, al ser el total de los asesinados políticos desde esa fecha más de 35.000, quedarían más de 30.000 asesinados que atribuir a fuerzas distintas de la izquierda marxista. Atribuirlos a la extrema derecha es una escapatoria, pues fuera de que muchos de ellos han sido probadamente atribuidos a los Cuerpos de Seguridad y organismos afines, esa matanza masiva, sistemática y permanente, a la que se refiere el Informe de la ONU, pertenece a la estrategia misma del proyecto gubernamental y de los poderes que lo sustentan. En razón de esta represión puede hablarse de que en El Salvador se da un verdadero genocidio y una guerra de exterminio como una de las características fundamentales del proceso que empezó el 15 de octubre de 1979 (González, 1980, p. 983-1000).

La represión que toma formas alucinantes pretende aterrorizar a la población y busca impedir que las masas populares se adhieran pública y eficazmente al movimiento revolucionario. En una primera fase que fundamentalmente termina con el asesinato de los máximos dirigentes del FDR a finales de noviembre de 1980 y con el de las religiosas norteamericanas pocos días después y en la que se había asesinado al máximo dirigente espiritual de los salvadoreños, Monseñor Romero, se procuró muy eficazmente aterrorizar a los dirigentes políticos democráticos, fueran estos maestros, educadores, sindicalistas, sacerdotes, políticos opositores. En una segunda fase disminuye notablemente la persecución a los dirigentes políticos e intelectuales más llamativos,

pero se acentúa, si cabe, la represión contra los estamentos más populares.

No puede hablarse en el mismo sentido de represión por parte del movimiento revolucionario. Ciertamente el FMLN ha conducido múltiples acciones violentas, las más de ellas con objetivos estrictamente militares; ha asesinado a algunos altos dirigentes políticos y económicos; ha cometido secuestros, sobre todo en la primera etapa de su actuación; ha perpetrado ajusticiamientos públicos de personas deladoras o inculpadas de crímenes. Pero ni el número, ni la cualidad, ni el modo permiten hablar de represión de la misma forma, que en el caso de sus enemigos. La represión, estrictamente entendida, no juega un papel relevante en la estrategia revolucionaria; es, en cambio, uno de los elementos esenciales de la estrategia anti-revolucionaria.

Un rasgo más conviene señalar y resaltar en esta característica de la represión; la impunidad casi absoluta con que se lleva a cabo, aun en casos tan notorios como los de Monseñor Romero, el Ingeniero Félix Ulloa, Rector de la Universidad de El Salvador, los dirigentes del FDR o el miembro prominente del PCN, Rafael Rodríguez. La impunidad de los asesinatos constantes y masivos indica lo esencial que es a la estrategia general este comportamiento y lo extendido que está en la estructura gubernamental y paragubernamental, militar y paramilitar. El entrar a fondo en este problema sería descubrir verdades muy escandalosas y supondría un debilitamiento tal de lo que son actualmente las columnas de la estructura del poder, que se refiere, incluso por parte de Estados Unidos o del Partido Demócrata Cristiano —cuando estaba en el poder—, el silencio y el disimulo.

c) **El reformismo socio-económico** es otra de las características del proceso. Junto con la represión e indisolublemente unida a ella se planteó desde un principio una serie de reformas, de las cuales la principal y más llamativa fue la Reforma Agraria. El planteamiento en favor de las reformas venía de antiguo y era parte fundamental de los programas de los distintos partidos de oposición. La primera junta las preparó y la segunda las echó a andar. Pero el reformismo del proceso estaba herido de muerte desde su comienzo. No sólo estaba unido firmemente al otro elemento esencial del proceso que era la represión; no sólo traía la intención espúrea de debilitar el movimiento revolucionario ya a las inmediatas, aunque también traía la intención de debilitar las posiciones oligárquicas, pero mucho más a la larga; no sólo iba a desarrollarse en condiciones sumamente difíciles, sino que resultaba inaceptable tanto para el capital como para el movimiento revolucionario. El reformismo, en consecuencia, se emprendió en circunstancias muy desfavorables y recibió como recompensa toda suerte de fracasos. Se sigue usando como careta y disfraz de lo que son las intenciones fundamentales y se sigue usando como coartada para vender el proceso salvadoreño en el mercado internacional, especialmente en el norteamericano. Pero está herido de muerte y, si no cambian las circunstancias, el reformismo, tal como se ha llevado en estos dos años y medio, ha quedado desprestigiado gravemente por mucho tiempo.

d) **La descomposición del ordenamiento constitucional y jurídico** es otro de los elementos esenciales del proceso. El 15 de octubre pretendía una recuperación real de un orden jurídico, que los últimos meses del General Romero había dejado maltrecho. Quiso autojustificarse desde el derecho a la insurrección legitimado en la Constitución vigente, quiso empezar a regirse por las exigencias de la justicia, quiso establecer un régimen legal claro, aunque en muchas ocasiones irregular desde un punto de vista formal. Pero pronto todo se vino abajo. La Constitución volvió a ser letra muerta, el Estado de Sitio se convirtió en la práctica habitual, reconfirmada mes a mes, porque según sus patrocinadores todo seguía igual, se estableció por meses el toque de queda, que facilitó y multiplicó las muertes nocturnas; se promulgaron decretos, como el 507, que dejan indefensos a los detenidos... Y sobre todo el poder judicial quedó más a la deriva que nunca sin atravesar a hacer justicia ni en los casos más clamorosos y sin levantar la me-

nor protesta contra las mayores injusticias. Se ha vivido durante todo este tiempo a golpe de decreto inconsulto y a golpe de arbitrariedades sin cuento.

Esta misma la descomposición del orden constitucional ha llevado a la imposibilidad durante casi todo el período de una actividad política mínimamente democrática. Prácticamente los partidos estaban cancelados y su actividad se reducía a pronunciamientos en la prensa, porque la movilización partidista propiamente tal estaba o prohibida o impedida por la fuerza. Si esto era verdad para los partidos de oposición de la derecha, lo era mucho más para los partidos y movimientos de la izquierda. La participación popular era imposible; la vida política le estaba vedada a la mayoría del pueblo. Sólo cuando se pensó en la necesidad de unas elecciones, al final del proceso, esta situación cambió un tanto, pero sólo respecto de los partidos de derecha y de los grupos más fuertes del capital, que siempre pudieron hacer sus campañas, pues los instrumentos a su disposición permanecieron prácticamente intocados. Lejos de favorecer una democratización el proceso llevó a todo lo contrario.

e) Al hablar de la internacionalización del conflicto se insinuó ya la **norteamericanización** del proceso. Esta es también una característica importante. La norteamericanización del proceso consiste en que Estados Unidos se convierte en el elemento decisivo del mismo; no de una manera absoluta y total, porque encuentra diversos modos de resistencia, pero sí de una manera predominante. Estados Unidos es el programador de la política general salvadoreña, es el programador y patrocinador de la guerra y es el apoyo económico fundamental. Empezó a ser todo esto en los últimos meses de la Administración Carter, pero lo ha sido de forma mucho más intensa en la Administración Reagan. Puede decirse que contra la voluntad y el veto de los norteamericanos nada importante puede ocurrir en El Salvador; puede también decirse que lo que ellos se propongan positivamente es lo que se va a convertir en política predominante. El método es fácil. Sin ellos, la guerra, como elemento definitivo del conflicto, quedaría perdida o en grave peligro de perderse; sin ellos, la economía no podría ni siquiera llevar el frágil curso que hasta ahora lleva. Tienen, pues, hipotecado a El Salvador. Y no va a ser posible desplazarlos de aquí, mientras no se resuelva el conflicto, a través del cual pueden hacer toda suerte de chantajes.

Desde este punto de vista puede decirse que

el proceso no ha sido ni puede ser en estas condiciones mínimamente nacionalista, mínimamente salvadoreño. Sólo los partidos de oposición derechista y, desde luego, el movimiento revolucionario, están dispuestos a protestar contra este intervencionismo exagerado, aunque sean muy distintas las razones de unos o de otros. Los partidos de oposición derechista no aceptan las reformas y el respeto de los derechos humanos que Estados Unidos exige para poder disimular su intervención militar en busca de la derrota definitiva de la guerrilla. El movimiento revolucionario no lo acepta, porque sabe que los intereses norteamericanos no son ni pueden ser en general los intereses del pueblo salvadoreño y, mucho menos, los intereses de las mayorías populares. Ha sido la Democracia Cristiana y el Alto Mando quienes han tolerado y aun buscado esta norteamericanización del proceso salvadoreño, convencidos de que sin la presencia activa del apoyo militar, económico y político-diplomático de Estados Unidos no podrán contra el poder y la decisión del movimiento revolucionario. La trampa ha quedado magistralmente cerrada. Y hoy hay que contar con Estados Unidos no sólo como potencia exterior sino como una de las fuerzas internas decisivas. Mientras no se logre que El Salvador pueda resolver sus problemas sin la ayuda militar y económica de Estados Unidos, es impensable que Estados Unidos no emplee esta dependencia para sacar adelante lo que más le conviene. El dinero es de ellos, la fuerza es de ellos. Querer éstos sin aceptar su influjo decisivo es una utopía política, más bien un ensoñamiento irreal. Los máximos dirigentes de los partidos aceptan que nuestra soberanía está pisoteada por Estados Unidos a cambio de "humillantes mendrugos" (D'Aubuisson), pero esos mismos máximos dirigentes aceptaron las presiones norteamericanas incluso a la hora de elegir y nombrar al Presidente Provisional de la República. En definitiva, la norteamericanización del proceso salvadoreño es una realidad y una realidad definitiva.

f) La desinformación sistemática ha sido cultivada para que la gran mayoría de la población no llegue a conocer objetivamente lo que está pasando en el país. Tanto los intereses gubernamentales como los militares y económicos han hecho que los grandes medios de comunicación social hayan dado una imagen deformada, que los lectores y oyentes de medios extranjeros han podido corregir, pero no así la mayoría de la

población. Durante el proceso han sido suspendidos o acallados los medios de comunicación que sustentaban opiniones independientes o favorables al movimiento popular, por largos periodos se han 'encadenado' las radios y se ha prohibido dar información independiente, la empresa privada y el gran capital se han visto favorecidos a la hora de poder presentar sus puntos de vista y sus presiones psico-sociales, COPREFA manipula las noticias militares y desfigura sistemáticamente las acciones y las ideas de la oposición democrática. Sólo la relativa oposición de los partidos de derecha contra la democracia cristiana y el periodo electoral han permitido que salieran a luz algunas de las contradicciones del proceso y algunos de sus fallos fundamentales. Sólo algunas voces independientes se han atrevido a analizar causas, efectos y agentes de la represión contra el pueblo. La información y la propaganda del FMLN llega con dificultad y no a sectores muy amplios. En estas condiciones la conciencia colectiva está, en el mejor de los casos, poco y mal informada; en la mayor parte de los casos positivamente desinformada (Stein, 1979, p. 647-672).

g) La conducción del proceso fue llevada en el interior del país con escasa participación de las fuerzas sociales, fue una conducción restringida y partidista, que no hubiera podido subsistir sin el decidido apoyo y la constante intervención de Estados Unidos. La primera junta contó todavía con el respaldo de fuerzas sociales progresistas y del conjunto de los partidos, que ganaron las elecciones presidenciales de 1972 y 1977; la segunda junta, en cambio, nacida de un pacto entre una parte de la Fuerza Armada y una parte del Partido Demócrata Cristiano tuvo cada vez menos apoyo social, una vez que los elementos más democráticos y progresistas aun de la Fuerza Armada y del propio partido, se retiraron. Esto no quiere decir que el respaldo no fuera mayor entre sectores populares y medios, entre sectores eclesiásticos, etc., pero la conducción política era minoritaria y estrictamente unipartidista. El gran capital quedó al margen, así como la pequeña y la mediana empresa; quedaron fuera del juego político los partidos tanto de la derecha como de la izquierda y quedaron fuera de toda participación las mayorías populares, organizadas o no. En definitiva, el protagonismo del proceso no tuvo nada de nacional ni mayoritario.

h) ¿Tuvo el proceso la característica de ser una vía media entre el extremismo de derecha y el

extremismo de izquierda como lo publicitaban a una el Partido Demócrata Cristiano con la Internacional Demócrata Cristiana y Estados Unidos? La primera junta pudo ser considerada como una vía media, en cuanto intentó buscar profundas reformas antioligárquicas con el máximo respeto a los derechos humanos y el repudio de toda forma de represión —cosa que no logró por la contradicción interna que suponía la presencia de los militares— y en cuanto estuvieron presentes en la junta y en el gobierno todos los partidos progresistas. Pero esto no es válido para la segunda junta, con la cual el proceso adoptó como elemento esencial la represión de la izquierda y la tolerancia o impunidad de los excesos criminales de la extrema derecha. La Democracia Cristiana no puede desligarse de la política total de la junta y del gobierno, en los que participaba, alegando que la represión era cuestión militar bajo el cuidado de la Fuerza Armada y que las reformas eran lo propio suyo. Todo el paquete formaba una sola unidad, en la que, además, predominaba el elemento militar de la guerra y el elemento represivo de una brutal, sistemática e impune violación de los derechos humanos. El argumento tantas veces repetido por la DC, al menos en privado, de que sin ellos las cosas hubieran ido peor, ni es verdadero ni, en caso de serlo, legítima nada. El proceso, en definitiva, tenía elementos de vía media, pero en su totalidad era un proyecto derechista, al servicio de los intereses norteamericanos, tal como se demostraría tras las elecciones.

5. Resultados del proceso

Los resultados del proceso son consecuencia de las características de mismo y, en parte, se confunden con éstas. Puede ser útil, no obstante, considerarlos por separado en orden a sacar conclusiones válidas para el futuro. El proceso del 15 de octubre no ha concluido todavía, aunque ya ha tomado otras formas y son otros sus protagonistas. Pero algunos resultados son lo suficientemente graves y definitivos como para sacar lecciones de ellos. Son estos resultados, más allá de las intencionalidades de los agentes principales del proceso, los que pueden mostrar cuál es su realidad verdadera, su verdad. Sabemos qué se buscaba con el 15 de octubre, veamos ahora que resultó.

a) El proceso del 15 de octubre ha conducido a una terrible guerra civil, cada vez más extensa y profunda, cada vez más destructora. Lo importante no es determinar si el término 'guerra civil' se aplica con propiedad a lo que está ocurriendo en El Salvador; lo importante es darse cuenta de lo que está ocurriendo realmente, a reserva de colocarle después el término adecuado. Pues bien, cuando la segunda junta accedió al poder, la militarización y, sobre todo, la armamentización del FMLN era realmente pequeña: sus milicias —apenas podía hablarse entonces de ejército— no sobrepasarían los 500 hombres, ligeramente armados, como afirmaban por entonces los máximos dirigentes de la Embajada de Estados Unidos; sus acciones militares, en consecuencia, eran

Casi todos los grupos, aunque con distinta intensidad y diferentes cualificaciones, sostuvieron desde un principio que sólo el pueblo armado podría sacar adelante la revolución. No es que estos grupos desconfiasen del derecho y del poder de las masas para alzarse con el triunfo, pero suponían que este derecho y este poder no iban a ser eficaces, más que si se armaban supuesto que el enemigo iba a contar con las armas del ejército para impedir los avances revolucionarios.

mínimas y no pasaban de pequeños golpes de mano, ocupaciones y tomas, secuestros, hostigamientos y bombas. En un año escaso las cosas cambiaron rápidamente: el FMLN se ha constituido en un ejército con cerca de 5.000 hombres bien armados, bien entrenados, bien dirigidos y que han demostrado una gran capacidad militar, no sólo a la hora de resistir y fortalecerse, sino a la hora de propinar severos golpes al enemigo. A pesar de los 350 millones de dólares de ayuda militar recibidos por el ejército salvadoreño; a pesar de todo el esfuerzo de aprovisionamiento militar de tierra y aire, el cual puede estimarse como verdaderamente sofisticado y avanzado en relación a lo usual en el área; a pesar de que los militares norteamericanos llevan dos años de entrenar masivamente al ejército salvadoreño, de suerte que éste cuenta con tres batallones —cerca de tres mil hombres— preparados por ellos; a pesar de la presencia en el terreno de la guerra y en la programación de la misma de más de sesenta asesores; a pesar de que los efectivos militares salvadoreños se han más que duplicado en el transcurso del proceso, y a pesar de que llevamos 18 meses de duros y constantes combates, una cosa es cierta: el FMLN, lejos de estar debilitado, acomete acciones cada vez de mayor fuerza y cada vez más victoriosas. La ofensiva de enero de 1981 fue contenida con relativa facilidad por parte de la Fuerza Armada, obteniendo en aquella ocasión el mayor triunfo militar de toda la guerra con el cerco y aniquilamiento de la columna del FMLN en Cutumay Camones. Pero de entonces acá, no sólo no se han dado golpes semejantes, sino que, al contrario, el ejército nacional ha sufrido muy serios golpes. Las constantes y masivas ofensivas de la FA en Chalatenango, Guazapa, Cabañas, San Vicente, Morazán, Usulután, etc., demuestran que cada una de las anteriores no logró el resultado apetecido y que ha sufrido derrotas parciales tanto por falta de resultados positivos como por el robustecimiento permitido a las fuerzas adversarias (Villalobos, 1982). El número y proporción de bajas por lado y lado demuestran asimismo la dureza de la lucha y la desventaja relativa que lleva la FA en esos enfrentamientos: desde enero de 1979 a diciembre de 1980 podían contabilizarse 340 efectivos muertos, mientras que de enero de 1981 a junio de 1982 los muertos identificados con nombres, grado y lugar— suman 1,492; con lo cual puede suponer fácilmente más de cinco mil bajas, de las cuales posiblemente dos mil son irrecu-

perables para la guerra. Los muertos por parte del FMLN en el mismo período pueden alcanzar la cifra de 700 y cerca de dos mil bajas, de las cuales mil son irrecuperables para la guerra. La recuperación de armas por lado y lado ha sido en proporción de 10 a 1 favorable al FMLN. Una buena parte de la Fuerza Aérea fue destruida en tierra a 12 kms. del centro de la capital, donde está la base principal del poderío aéreo. La última batalla de Morazán (junio-julio 1982), en la que se hicieron presentes las mejores fuerzas del ejército salvadoreño en número superior a 4.000, terminó en una derrota espectacular, la mayor de la guerra, con altos costos en hombres y armamento, entre los que está la muerte de un coronel y el aprisionamiento del Sub-secretario de Defensa. Por otro lado, el FMLN ha logrado disponer de ocho grandes frentes estratégicos en el campo y de un frente metropolitano en la capital, cubriendo amplias secciones en las zonas oriental, para-central y central del país. Tiene un cierto dominio o capacidad de acción rápida sobre las principales vías de comunicación que conducen de San Salvador al oriente y al norte del país y puede dar golpes militares, de alguna consideración en el propio corazón de las ciudades más importantes, incluida la capital.

Junto a ello debe añadirse la capacidad de sabotaje del FMLN, reconocida públicamente por autoridades civiles y militares. El sistema de energía nacional está severamente golpeado y cada vez lo estará más; lo mismo cabe decir del sistema de comunicaciones tanto viales como telefónicas. Aunque en la capital no se sienten tanto los efectos del sabotaje, en la zona oriental, especialmente en San Miguel, La Unión y La Libertad, son muy graves y ya va siendo habitual la falta de energía eléctrica y aun la falta de agua potable.

Este ligero recuento de la marcha de la guerra permite concluir que al entregar el poder la segunda junta había dejado a los salvadoreños una guerra que, cuanto tomó el poder, no existía; una guerra de cuyo inicio no fue totalmente responsable, pero que fue incapaz no sólo de concluirla victoriosamente, sino tan siquiera de inclinarla a su favor; fue incapaz asimismo de terminarla por la vía de la negociación, una y otra vez ofrecida por sus adversarios a lo largo de 1981 y 1982. A su favor sólo cabe decir que tampoco la FA pudo ser derrotada, gracias al masivo apoyo de Estados Unidos, con lo que se impidió el triunfo militar del FMLN y, por consiguiente,

la toma absoluta y rápida del poder (Proceso No. 46, p. 1-3, 16-19; Campos, 1982, p. 18-22; Villalobos, 1981; Leiken, 1982, p. 69-71; Anderson, 1982, p. 8-10, 7-9).

b) Los **derechos humanos** en su conjunto nunca han sido inculcados tan grave y masivamente como durante el proceso que estamos examinando. Algo que el 15 de octubre quiso eliminar, pero ha sido una de las características del proceso y ha sido también uno de sus resultados. No insistiremos en este punto, pues en este mismo número de la revista se hace el recuento detallado de lo que ha sido la violación de los derechos humanos durante el período. Las últimas cifras siguen probando lo que fue el proceso y lo que fueron sus resultados. El proceso produjo al país y sigue produciendo la mayor sangría de su historia. A la hora de sopesar resultados positivos y negativos hay que poner al frente el tremendo debe de la represión y de la violación de los derechos humanos. Los males de la guerra pueden ser atribuidos a ambas partes; los males de la represión sólo a una. Para comprobarlo basta con recoger las cifras de muertos fuera de combate que recoge el Socorro Jurídico Cristiano de El Salvador de enero a junio de 1982: son tres mil cincuenta y nueve, con un pico de 805 en abril y un mínimo de 355 en junio. Pero para darse cuenta de las proporciones la misma fuente afirma que en abril-junio, 1535 fueron muertes imputadas al ejército y a organizaciones paramilitares de derecha, mientras que a la guerrilla, en los mismos meses, sólo le fueron imputados 23. La información, según la fuente, ha sido tomada de los periódicos locales, expedientes judiciales, comunidades cristianas y de personas directamente agraviadas (Socorro Jurídico Cristiano, 1982). El mayor número de víctimas son campesinos (696) y desconocidos (1950). Se puede pensar que se insinúa un decrecimiento de víctimas civiles en los meses de mayo y junio, precisamente cuando ha terminado el mandato de la primera junta, pero dos meses no son suficientes para sacar conclusiones definitivas.

Si la vida es así violada, es fácil de imaginarse cómo lo serán otros derechos fundamentales. Ya la propia legislación vigente, puesta en marcha por la segunda junta contiene una serie de decretos inaceptables que van desde el Estado de Sitio hasta el Decreto 507 "que a todas luces viola o da pie para legitimar la violación de los derechos humanos", como ha advertido Mons. Rivera y Damas (Rivera, 1982). Asimismo el

Decreto 544 que congela los salarios, mientras suben incontenibles los precios, lo cual ha causado repetidas protestas de los empleados públicos y de cuantos se atreven a manifestarse.

Por donde quiera que se mire el efecto del proceso sobre los derechos humanos ha sido devastador (Report on Human Rights, 1982). Como resultado del proceso los derechos humanos cuentan cada vez menos. Las posiciones psicológicas que llevan a su vulneración se ven favorecidas con el tiempo que transcurre, la organización que los ataca se introduce más en la vida social y la crueldad con que se violan alcanza formas sádicas renovadas. Se ha convertido en un cáncer social, además de haberse programado como arma fundamental para la lucha antirrevolucionaria. Será largo y difícil no sólo la curación del mal, sino también el exterminio de sus causas inmediatas. No en vano más de 500,000 salvadoreños vagan lejos de sus hogares y de sus pueblos en campos de refugiados dentro y fuera del país, escondidos y acosados por el miedo, empujados de un lado y otro. Este es uno de los efectos más esclarecedores de lo que ha sido este proceso, el cual pensó hacer todo lo contrario y ha concluido en tragedia dantesca para una grandísima parte de la población.

c) Resultado también del proceso ha sido no ya la desmoralización del país sino su creciente **grado de deshumanización** y de ruptura profunda de la comunidad nacional. Evidentemente, antes del 15 de octubre, se daban ya males profundos en este sentido y podía hablarse de una innegable lucha de clases, que tenía al país al borde de la guerra civil (Jung, 1980, p. 3-25). Pero lo que era latente y virtual se ha desatado en estos dos últimos años de forma virulenta. El país está geográficamente partido, pero no en dos partes sino en innumerables enclaves: hay territorios controlados por la guerrilla donde decenas de miles de salvadoreños no siguen al gobierno central, sino que se organizan en formas diversas de poder popular. El país está polarizado, pues aunque se da una amplia zona media de ciudadanos no directamente comprometidos en la lucha, hay dos partes muy amplias también y que se consideran a sí mismas como formalmente enemigas, cada una buscando la destrucción de la otra. La deshumanización se da sobre todo entre quienes dirigen la guerra y la represión, pero en las formas más distintas se ha ido apoderando de la población entera, que se ve obligada a subsistir como sea: la verdad importa poco, la justicia

menos; recuérdese la acusación siempre válida de Monseñor Romero sobre la venalidad de los jueces y la inoperancia de todo el aparato judicial. Aunque la lucha revolucionaria ha traído también consigo el desarrollo de virtudes y hábitos valiosos, no lo ha hecho, aun en esos casos, sin costos humanos y sin mengua de algunas disposiciones y aptitudes fundamentales para la convivencia. Así mismo es posible reconocer el desarrollo de virtualidades en sectores sociales, que se han crecido ante las dificultades y las han afrontado con energía creadora. Pero todo ello no obsta a que deba reconocerse un elevado saldo negativo en el conjunto de la nación por lo que toca a la humanización de sus comportamientos y al desplazamiento de sus valores tradicionales. Este es un punto difícil de cuantificar e incluso de cualificar, pero lo que de momento aparece como más llamativo son los efectos negativos de un gran trauma, efectos que se están incrustando y consolidando en la conciencia nacional y en la práctica de muchos ciudadanos. Hay dirigentes políticos que en razón de Estado o por permanecer en el poder han tolerado sin protesta alguna pública comportamientos oficiales gravemente lesivos e injustos; ha habido dirigentes religiosos que han preferido la prudencia a la verdad y la justicia y han ideologizado lamentablemente el curso de los acontecimientos equivocando sus intereses inmediatos con los del Reino de Dios; entre el propio pueblo se han enablado un proceso de rivalidades revanchistas y de sálvese quien pueda, que costará sanar ... Todo ello lleva a la necesidad de una profunda reconstrucción moral, que lejos de haberse comenzado se ve impedida todavía por la profundización de las heridas (Campos, 1982, p. 31-32).

d) El proceso ha conducido también a un **gravísimo empeoramiento de la economía**. El fracaso económico del proceso ha sido reconocido por la empresa privada y por los congresistas norteamericanos. Los planes de relanzamiento económico fracasaron. Las cifras están ahí para demostrarlo (CUDI, 1982). En el Segundo Simposio del Sector Productivo, tenido a finales de mayo de 1982, se concluyó que "la situación económica del país es verdaderamente crítica y no se ha derrumbado debido únicamente a la laboriosidad del pueblo salvadoreño y a la tenacidad de sus empresarios"; "la principal causa de la crisis económica... es el caos jurídico que creó el gobierno del Partido Demócrata Cristiano"; "también han tenido importancia en el deterioro eco-

nómico las actividades destructivas de los grupos subversivos y algunos factores externos como la reducción en el precio internacional de nuestros productos básicos, el alza en el precio del petróleo y el deterioro del Mercado Común Centroamericano" (Unidad Productiva, 1982, p. 28-29). La guerra no ha dejado de ser una de las causas principales del destrozo económico, no sólo por la destrucción de la infraestructura, sino por el clima de inseguridad que propicia, en el que la inversión se hace improbable. Las reformas no han tenido y posiblemente no han podido tener ni efectos políticos ni efectos económicos satisfactorios. De todo ello se escribe en este mismo número de la revista. El proceso del 15 de octubre lejos de empezar a resolver la situación económica, que en 1979 afligía al país, la ha empeorado notablemente, no tanto por incapacidad de quienes lo han dirigido cuanto por el modo mismo de plantear el proceso. También aquí los conductores del mismo se vieron solos. El gran capital sacó sus recursos fuera del país haciendo a la economía patria un daño mucho mayor que el causado por los sabotajes. Pocos o nadie quisieron colaborar y es que el proceso ni daba seguridad ni ofrecía esperanzas para nadie.

e) **La pérdida de la soberanía nacional** se ha acentuado notablemente durante los dos últimos años, principal, aunque no exclusivamente, por la norteamericanización del proceso. Ni las decisiones económicas, ni las decisiones políticas, ni las decisiones militares están en manos de salvadoreños o de grupos sociales salvadoreños. Están de manera decisiva y hegemónica en manos de Estados Unidos. Los conductores del proceso no se bastaban a sí mismos para imponer la dirección del mismo y se entregaron casi totalmente a quien tenía la fuerza y los recursos para mantenerlos en el poder. Tanto la derecha como la izquierda han acusado de este vicio radical a la segunda junta, aunque la derecha no se ha atrevido a hacer responsable de esta dejación de la soberanía al sector militar, cuando la verdad es que en esto el sector político de la Democracia Cristiana y el sector militar del Alto Mando iban perfectamente mancomunados. Ya contra el Embajador White la derecha hizo fuertes reclamos no tanto por considerarlo procónsul, sino porque imponía las reformas; contra el embajador Hinton ocurre lo mismo, porque no ha dejado que llegue a la Presidencia del Ejecutivo, el candidato de los vencedores de las elecciones (Cruzada pro Paz y Trabajo, 1982). La acumulación

de datos sobre este tema no deja duda alguna de quién condujo el proceso del 15 de octubre, una vez que éste tomó la forma de la segunda junta (Hadar, A., 1981).

No es tan fácil atribuir a las alianzas exteriores del FDR-FMLN la acusación de poner en peligro la soberanía nacional. Puede ser cierto que parte de su conducción y de sus acciones se hagan en diálogo con fuerzas extranjeras, pero no hay pruebas de que su surgimiento haya dependido de ellas ni de que en su desarrollo y acción sean elementos hegemónico y determinante. Con todo, no debe desatenderse este punto al estudiar los resultados del proceso.

f) Dos resultados, considerados muy positivos por los gestores del proceso, son la **legislación sobre las reformas** y su implementación por un lado, y el haber concluido el proceso con **las primeras elecciones libres**, que se han dado en El Salvador desde hace cincuenta años, con la consiguiente normalización de la democracia representativa por el otro lado. Incluso se propone como éxito notorio, el que el proceso haya concluido de momento con un Gobierno de Unidad Nacional.

La legislación sobre las reformas ahí está. En su letra con reformas importantes. Tal vez no son todo lo profundas que el país requeriría, sea a corto o a largo plazo, pero son significativas. Una cosa es que el proceso haya legislado reformas y las haya puesto en marcha y otra que las reforma hayan resultado, esto es, que hayan dado los resultados esperados. No lo han dado económicamente, pero tampoco lo han dado políticamente por cuanto, tanto el movimiento revolucionario como el anti-revolucionario, están hoy más fuertes sobre todo éste último. No hay evidencia de que el FMLN tenga hoy menos sustentación popular en razón de las reformas, porque no ha habido libertad de organización y manifestación de las fuerzas populares y porque el proceso revolucionario se ha militarizado, aunque esta militarización no hubiera sido posible sostenerla sin un activo y masivo apoyo de las masas populares (Villalobos, 1982).

Las elecciones pueden considerarse como un éxito relativo, pero importante. A pesar de que en su planteamiento y en las consecuencias que de ellas salieron, estuvo muy presente la mano de Estados Unidos, congregaron en circunstancias difíciles un número notable de electores, aunque de ninguna manera los que oficialmente se dieron como votantes (Las elecciones, y la unidad na-

cional: 10 tesis críticas, 1982). En este mismo número de la revista se da mayor evidencia empírica de las irregularidades que se cometieron en el evento electoral. Pero a las elecciones hay que reconocerles algunos méritos, los cuales pueden considerarse resultado del proceso: por primera vez las elecciones no fueron ganadas por el partido en el poder sino por los partidos opositores, restableciendo en parte, la vida política con la instauración de la Asamblea Constituyente y la puesta en marcha de los partidos políticos de derecha, que habían llevado una vida aletargada o no habían existido como partidos; gracias a ellas se ha vuelto al juego democrático representativo, aunque no se ha conseguido que en él participen los sin duda poderosos cuantitativa y cualitativamente sectores de la izquierda; con ellas ha concluido el régimen de excepción iniciado el 15 de octubre de 1979.

Pero nada de esto toca sustancialmente a lo que había antes del 15 de octubre. También entonces había Constitución, también entonces había Asamblea, también entonces se da la posibilidad formal de los partidos políticos. El Gobierno de Unidad Nacional puede considerarse como el resultado de un cierto consenso de los partidos de derecha, programado por Estados Unidos y forzado desde la embajada norteamericana, lo cual a su vez, ha impedido que haya una verdadera oposición tras las elecciones como la hubo antes de ella. La derecha fue capaz de hacer oposición pero la Democracia Cristiana no lo ha sido y se ha alistado en el gobierno, con quienes hasta ahora consideraba extraños e irreconciliables por representar la extrema derecha.

g) Resultado del proceso es también la **consolidación y maduración del movimiento revolucionario**. Lo que en el 15 de octubre de 1979 eran un conjunto de organizaciones político-militares, algunas de ellas con un número importante de miembros, pero muy divididas entre sí y con poca experiencia real sobre el conjunto de problemas y fuerzas nacionales, se ha convertido hoy en un verdadero movimiento revolucionario con una creciente fuerza militar, con unos núcleos de organización amplios y fuertes y que han llegado entre sí a un grado de unidad aceptable (López Vallecillos, 1980, p. 183-306; Galván, 1979, p. 591-600; Campos, 1979, p. 477-488; Nuestras Organizaciones populares, 1980, p. 128-130, DRU, 1980, a, p. 537-539; DRU-PM, 1980, a, p. 1092-1093; DRU-PM, 1980, b, 1094-1095; DRU, 1980, b, p. 1221-1223; CRM, 1980; FDR, 1980, p. 346;

MIPTES, 1979; Segundo Manifiesto, 1980, p. 404-406; MNR, 1980). Aunque parecen subsistir diferencias ideológicas en cuanto a la estrategia general, en cuanto al valer de cada organización para responder a las condiciones salvadoreñas, en cuanto a la estructuración independiente de cada una de las organizaciones, en cuanto a la conducción de la guerra y en cuanto al reacomodo actual de la estrategia general, parece que se ha avanzado muy notablemente en la unidad desde antes de 1979 hasta ahora. Esto es perceptible en políticas fundamentales como la de la negociación y la del planteamiento de un gobierno democrático revolucionario o aun de un gobierno de amplia participación nacional. Es perceptible también en una creciente cooperación de los distintos frentes militares, los cuales en un primer momento trabajaron muy descoordinados. Aunque al interior del FDR-FMLN sigue la discusión ideológica, la praxis revolucionaria de estos años, la necesidad de contactos con la diplomacia internacional y el mutuo acercamiento personal han consolidado el movimiento y le han dado también una amplitud de miras políticas que antes no tenía el movimiento revolucionario. Ha perdido, sin embargo, en disponibilidad de las masas al haber acentuado la lucha militar y el trabajo en el extranjero y al no haber podido encontrar formas nuevas para conservar vivo el trabajo de las masas, aun en circunstancias muy difíciles por causa de la represión. Pero, en definitiva, puede decirse que el FDR-FMLN en sus relaciones mutuas y en su grado de acomodación a las condiciones reales que posibilitan y dificultan su marcha ha crecido mucho y ha logrado la aceptación internacional de países y movimientos políticos internacionales, que gozan de pleno respeto en la comunidad política internacional.

Considerando el balance de conjunto, sobre todo, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista humano, no deja de ser desolador. El proceso que comenzó el 15 de octubre con el propósito de sacar a El Salvador de una crisis incipiente, donde había violación de derechos humanos, corrupción, falta de orientación ha dejado las cosas mucho peor de lo que estaban. El máximo denunciador de este proceso fue Monseñor Romero con su vida y con su muerte. Monseñor Romero alentó el 15 de octubre, confió en que el pueblo saldría mejorado con el cambio; apoyó todo lo bueno que vio en él; no se desanimó ante los primeros contratiempos; impulsó a varios de los principales personajes del proceso a

continuar en él así como exigió a otros también principales a abandonarlo. Pero, por estar de corazón a favor del pueblo, por conocer con todo detalle la terrible violación de los derechos humanos, acabó siendo un denunciador implacable de las mentiras, las injusticias y la sangre que llevaba el proceso. Y el proceso no lo aguantó más de seis meses. Cayó asesinado como tantos otros que buscaban ante todo la justicia, la libertad y la paz. Por eso su vida y su muerte dicen tanto de lo que un patriota sincero y un profeta cristiano pueden decir de ese proceso. Tanto y más cuanto que no se ha hecho nada por aclarar el magnicidio más escandaloso que se ha cometido en el país, no sólo durante este periodo, sino tal vez en toda su historia. Nadie se ha atrevido a perseguir este caso. Estados Unidos no ha presionado para que se haga ni siquiera un simulacro de investigación, como lo ha hecho en el caso de las religiosas norteamericanas. Lo repetimos otra vez: la vida y la muerte de Monseñor Romero son el juicio cabal sobre el proceso del 15 de octubre (Sobrino, 1980, a y b; 1981, a; Martín Baró, 1981; Ellacuría, 1981, b; Presencia actual de Monseñor Romero, 1982, p. 143-156).

Desde el punto de vista de los hechos políticos, el balance es también negativo en relación con los propósitos y las esperanzas que dieron lugar al 15 de octubre. Esos propósitos y esperanzas partían de la necesidad objetiva de un cambio, de la urgencia de lo que entonces se llamo 'revolución necesaria', de la conveniencia de evitar una guerra civil (Pronunciamento del Consejo Superior Universitario de la Universidad José Simeón Cañas sobre la nueva situación del país tras el quince de octubre, 1979; Flores Pinel, 1979, p. 885-904. Pero la sucesión acelerada de hechos contrarios al 15 de octubre fue minando toda esperanza (La superación de un 15 de octubre fracasado, 1980, p. 929-950). En muchos no hubo un rechazo apriorístico y dogmático del proceso, sino que el proceso fue generando el rechazo. El abandono público y razonado del proyecto por parte de los mejores hombres de la primera junta y del primer gobierno, el inmediato repuntar de la represión, la recuperación del poder y el mando por los antiguos militares, lejos del espíritu de la Juventud militar, la intransigencia inicial del movimiento revolucionario y la imposibilidad de todo diálogo entre las partes en conflicto; el aislamiento político de la Democracia Cristiana; la galopante ascensión con la segunda junta de la más barba-



ra, sistemática y continuada violación de los derechos humanos más fundamentales, la imposibilidad de la más mínima confianza en la labor judicial, el creciente intervencionismo de los norteamericanos; la reorganización de las fuerzas oligárquicas... todo ello era la negación del 15 de octubre. El proceso quedó en otras manos y siguió rumbos muy distintos de los previstos.

Si recordamos ahora lo que al principio de este artículo llamábamos la pretensión del 15 de octubre, no queda más remedio que admitir objetivamente que esa pretensión como un todo y en cada una de sus partes no sólo no se ha conseguido, sino que el proceso ha dado como resultado un empeoramiento en todos y cada uno de sus objetivos. Pero la historia no puede volver atrás.

Estos dos años y medio han sido de los más intensos de la historia salvadoreña; en ellos han ocurrido demasiadas cosas, tantas que por su velocidad podría pensarse que el país ha recorrido aceleradamente la trayectoria de veinte años. Positivo o no, este es un hecho fundamental, ante el cual hay que tomar posición para aprovecharlo en favor de una salida al conflicto, que hoy más que ayer, amenaza con hundir a El Salvador, pero a hundirlo en un mar de sangre y destrucción.

6. Conclusiones deducibles del proceso

El 15 de octubre se encontró con una serie de problemas. Lejos de resolverlos los ha agravado. Pero ha dejado en claro qué soluciones no son

posibles, qué caminos son errados. A la hora de emprender un nuevo rumbo es menester hacer presentes, con toda nitidez, qué soluciones y qué caminos no pueden prolongarse más.

a) El 15 de octubre intentó buscar una solución intermedia. Suponía su análisis que la injusta e intolerable situación del país se debía fundamentalmente a que El Salvador estaba bajo el dominio casi despótico del capital concentrado en muy pocas manos; suponía asimismo que la solución a este problema estaba, por tanto, en acabar con ese dominio despótico. Por otro lado el 15 de octubre temía que en la lucha contra la oligarquía se cayera en un extremo totalitario marxista-leninista, lo cual también quería evitar. De ahí que plantearse una solución intermedia, quitar el poder y la fuerza tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda.

Pues bien, los sucesos acaecidos en estos dos años y medio indican que esa solución intermedia no es posible alcanzarla por el camino emprendido. No ha quedado descartada la solución intermedia, siempre que se conciba de otro modo y se intente realizarla por otros medios. Lo que ha quedado descartado es el modo seguido durante estos dos años. Lo esencial de esta solución intermedia fracasada puede puntualizarse así: (1) un planteamiento que lleva consigo la aniquilación violenta de uno de los extremos y el debilitamiento económico del otro; (2) una sumisión de la solución salvadoreña a los intereses norteamericanos, que quieren ante todo la aniquilación del movimiento revolucionario, subordinando a éste cualquier otro propósito; (3) un predominio del sector militar en la conducción del proceso, respecto del cual el elemento civil político representa un contrapeso mínimo; punto más grave cuanto la estructuración de la FA y de los Cuerpos de Seguridad deja mucho que desear en formación política y en respeto a las exigencias constitucionales; (4) implantación de las reformas en circunstancias sociales y militares totalmente adversas; (5) falta de un mínimo consenso nacional respecto del proyecto político fundamental en el que se hubiera de articular la solución intermedia; (6) el factor militar junto con el factor norteamericano han hecho de la solución no algo intermedio, sino algo mucho más cercano a los intereses oligárquicos que a las pretensiones revolucionarias; (7) incompetencia de los gestores del proceso tanto en lo político y económico como en lo militar.

En definitiva, las reformas profundas que

exige una solución intermedia no pueden ser llevadas a final feliz, ni siquiera mantenidas por el tipo de alianza formadas el 15 de octubre. Esto es verdad de la segunda junta, pero también lo es de la primera. Si se ha elegido el camino de las reformas, sobre todo por parte de Estados Unidos, ha sido en base a que sin ellas o surgiría necesariamente un movimiento revolucionario o se robustecería triunfalmente el ya existente; lo cual quiere decir que el movimiento revolucionario es necesario para sustentar la necesidad y la ejecución de las reformas. Por otro lado, los sectores representados por la DC e incluso por la Juventud militar ya desaparecida o neutralizada no pueden solos contrarrestar la oposición frontal de los sectores oligárquicos y aun la de aquellos que ponen toda su fe en la empresa privada y en la economía del mercado. Actualmente la mayor parte del poder, si dejamos de lado el poder revolucionario, e incluso la mayor parte de la fuerza, está en manos de los antireformistas. De ahí que sea ilusorio pensar en un plan político de reformas estructurales, capaz de ser considerado como solución intermedia sin poner en juego un poder y una fuerza que pueda contrarrestar el poder y la fuerza de los antireformistas.

Una cosa debe quedar clara. La pretendida solución intermedia nacida del pacto FA y DC ni era una solución intermedia ni era una solución viable, dada la correlación de fuerzas en el país. De hecho ha conducido, tras las elecciones, a una solución no intermedia sino claramente derechista. Porque, ¿en qué ha terminado el proceso?

El proceso ha terminado de momento en unas elecciones, en las que supuestamente el pueblo salvadoreño habrá expresado libremente sus opiniones. Esto no ha sido así (Las elecciones y la unidad nacional: diez tesis críticas, 1982, p. 233-258), pero sí puede afirmarse que las elecciones muestran el efecto causado por el proceso sobre las fuerzas no reformistas y aun antireformistas. Puede argumentarse que cerca de un 42% de votantes estimaron como aceptable el proceso reformista de la DC, pero esto supone tan sólo que hay en el país la necesidad y el deseo de reformas, lo cual es evidente, de modo que si se hubiera llevado bien la consulta electoral y, sobre todo, si se hubieran llevado bien las reformas, ese 42% en favor de las reformas —no en favor de la DC— presumiblemente hubiera sido mucho más alto. Pero siendo esto así, aun siendo precisamente esto así, no encontramos con que los opositores, si no a las reformas, sí al modo como

habían sido llevadas a cabo por la FA y la DC, eran más que quienes estaban a favor. Dicho de otro modo, el presunto reformismo intermedio de la DC ha conducido a una configuración política de la nación más derechista. Antes del 15 de octubre el partido fuerte más derechista era el PCN; hoy ha surgido a su derecha otro gran partido, con lo cual ha quedado rechazado y extremado el proceso, máxime si se tiene en cuenta que prácticamente ha desaparecido la posibilidad de actuación política de los partidos de izquierda o centro-izquierda, los cuales actualmente no tienen representación alguna en la Asamblea. La propia DC se ha rechazado notablemente, pues, de ella se han apartado los elementos más progresistas para formar un nuevo partido el Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC). No es, pues, este el camino para instalar en el país un reformismo intermedio, una solución que evite la hegemonía de los extremismos.

Hay todavía otra prueba. La Democracia Cristiana en vez de pasarse a la oposición no clandestina ha buscado por todos los medios quedarse en el poder ejecutivo, una vez más, apoyada por Estados Unidos y argumentando que así garantiza mejor las reformas, garantiza mejor la no rechazación del proceso. Pero si ha podido aliarse con quienes hasta ahora ha tildado de extrema derecha, de responsables de crímenes horribles y numerosos, debe decirse que su carácter de solución intermedia no tiene consistencia, ni siquiera en teoría, porque en la práctica de su gobierno ya había demostrado no tenerla. Queda a su favor, sin embargo, el que le sigan matando dirigentes y miembros de su partido. Esto significa que la extrema derecha ve en lo mejor del PDC, esto es, no en su cúpula fácilmente manejable, un peligro real para futuras elecciones. Significa, por otro lado, lo difícil que es situarse en la oposición democrática, papel que no ha aceptado la DC en parte por temor, en parte por ambición, en parte por asegurarse algunas ventajas para las próximas elecciones y en parte por lo que ellos estiman como pragmatismo, el principio regulador de su conducta oficial a lo largo de todo este proceso.

b) La toma del poder absoluto del Estado por la vía de la revolución armada no es posible a corto plazo en El Salvador. Esta vía fue probada, sobre todo, a partir de enero de 1981 y, aunque ha ido mostrando, cada vez más, su fuerza y su consistencia, no sólo no ha conseguido el resultado previsto, sino que, ha originado la potenciación

de fuerzas contrarias poderosas, que no se daban antes en El Salvador de la forma en que hoy se dan y ha originado, sobre todo la presencia militar de Estados Unidos, decidido a no permitir un triunfo militar del FMLN. La tesis inicial del movimiento revolucionario era, en síntesis, que una conjunción de fuertes acciones militares y de fuerte presión de masas (lo decimos con esta amplitud imprecisa para englobar las distintas teorías de las diferentes organizaciones) podría conseguir el poder en corto plazo o, al menos, inclinar decisivamente la situación a su favor. El proceso ha demostrado que esta tesis inicial no era correcta. Los hechos parecen demostrar que no es posible a corto plazo la posibilidad de un triunfo militar total por parte del FMLN y que a mediano plazo tampoco es posible y, si lo fuera, no sería de la conveniencia del pueblo y del país entero, puesto que sufrirían unos costos casi insuperables.

A este propósito resultan sumamente significativos los análisis del comandante Villalobos, aunque no representen el punto de vista de todo el FMLN. Aunque razona sólidamente sobre el progreso absoluto y relativo de las fuerzas del FMLN en la guerra, sobre el robustecimiento del FMLN y el debilitamiento de la FA, afirma sin embargo: "el ejército hasta ahora ha demostrado que es incapaz de acabar el movimiento revolucionario salvadoreño, pero sí podría contenerlo, desgastarlo y esperar un mejor momento político y militar para su aniquilamiento... El que esto no suceda depende de la estrategia político-militar que el FMLN aplique en este momento" (Villalobos, 1982, p. 14). Todavía el FMLN puede dar más de lo que hasta ahora ha dado de sí la guerra. Antes de las fuertes y victoriosas batallas de Morazán se decía en el mismo documento: "el FMLN está ahora en condiciones de encaminarse decididamente a una ofensiva estratégica de sus fuerzas" (ib., 19); la superación de errores pasados permite salir a las fuerzas del FMLN "de la fase de resistencia a la que pasaron luego de la ofensiva general del 10 de Enero, para entrar a una etapa más ofensiva y definitiva de la guerra revolucionaria" (ib.). Aún así, los peligros de regionalización del conflicto y el deseo de economizar sacrificios del pueblo, hace que los revolucionarios salvadoreños "no estén empeñados en llevar inexorablemente a sus enemigos a una resolución en los campos de batalla... sino que están convencidos de que la mejor salida es la solución negociada sin anteponer condicionamien-

tos previos" (ib., 31). Desde luego "no están dispuestas a renunciar a su fuerza" ni a renunciar a la guerra, si sigue siendo necesaria por la intransigencia del enemigo, una guerra que llevaría a una victoria militar o, al menos, a una nueva situación político-militar.

Todo ellos nos hace pensar que no es posible una victoria militar, puramente militar por parte del FMLN.

c) Tampoco parece posible un triunfo militar a corto plazo por parte de la Fuerza Armada. Ni posible ni deseable. La ya larga marcha de la guerra así parece probarlo. Háblese o no de empate militar, de estancamiento, los propios asesores norteamericanos, los congresistas y representantes de la Administración, los analistas militares confiesan que no se ve término previsible a una victoria militar total (¿Empate militar?, 1981, p. 16-19; Campos, 1982, p. 18-22; Leiken, 1982; Villalobos, 1981, 1982). Una prolongación y profundización de la guerra, que sería la única posibilidad de un triunfo militar traería tales destrozos a la vida total del país, traería tal peligro de regionalización del conflicto y aun podría traer tales peligros a la paz mundial, que resulta absolutamente inaceptable.

Esto quiere decir que la solución oligárquica tampoco tiene posibilidades de imponerse por la fuerza de las armas, ni siquiera las tiene una presunta solución intermedia reformista. Debe abandonarse, por tanto, una política que haga de lo militar el elemento decisivo.

d) Que ninguna de las partes en conflicto haya tenido la capacidad de derrotar por la fuerza a sus contrarias, no es sólo un hecho ocasional. Apunta a algo más profundo. En El Salvador hay suficiente fuerza de parte y parte para que

ninguna de las partes pueda ser totalmente excluida y, menos, excluida por la fuerza. La Fuerza Armada creía tener un poder omnimodo para resolver por la fuerza de las armas cualquier conflicto de fuerza que se presentara al interior del país, pero los hechos han demostrado lo contrario, aunque siga teniendo la capacidad de resistir y no ser desalojada de su puesto de privilegio. El gran capital salvadoreño pensaba que podría movilizar fuerzas suficientes, como en el 32, para aniquilar cualquier movimiento revolucionario, pero se ha visto también que esto no es así, aunque se ha demostrado también que es muy difícil desalojarle de su posición de privilegio. El movimiento revolucionario, a pesar de su crecimiento cuantitativo y de su mejoramiento cualitativo, realmente extraordinarios, tampoco ha podido imponerse como única fuerza hegemónica, aunque ha demostrado que no se le puede desplazar por la fuerza de las posiciones militares y políticas ya consolidadas.

Es menester, por tanto, reconocer que hay fuerzas muy poderosas en El Salvador, que tal vez son irreconciliables a la larga entre ellas, pero que no pueden estimarse como suficientes por sí solas ni para acabar con sus adversarios ni para resolver el conflicto. La realidad de los hechos ha demostrado que las tesis previas aceptadas como evidentes por lado y lado, y aun los análisis de fuerzas y coyunturas, no eran del todo acertados. Unas y otros deben ser reexaminados a la hora de buscar soluciones a largo plazo y salidas a corto plazo. La misma dureza y prolongación de la lucha demuestra que el fenómeno social salvadoreño es mucho más complejo de lo que se pensaba, incluso en el plano de la fuerza física, cuanto más en el plano de las necesidades y de la voluntad de las mayorías populares.

El FMLN ha logrado disponer de ocho grandes frentes estratégicos en el campo y de un frente metropolitano en la capital, cubriendo amplios secciones en las zonas oriental, paracentral y central del país, tiene un cierto dominio o capacidad de acción rápida sobre las principales vías de comunicación que conducen de San Salvador al oriente y norte del país y puede dar golpes militares de alguna consideración.

e) Cualquier solución viable para el país exige no sólo la aquiescencia de los sectores revolucionarios, sino también su participación en la vida social y también en la vida política del Estado. Esta exigencia es de derecho, pero es también de hecho. Es de derecho porque muchas de las exigencias del movimiento revolucionario son necesidades objetivas, justas y apremiantes de las mayorías populares; es también de hecho porque cuentan y contarán con una fuerza apreciable para no permitir una solución que los margine de la vida social y de la vida política. Mientras continúe el movimiento revolucionario como enemigo activo de las soluciones propuestas desde el poder, no sólo no habrán posibilidades sólidas de reconstrucción, sino que proseguirá aceleradamente la destrucción. Visto el problema más positivamente debe decirse que la solución del país exige la integración de las fuerzas revolucionarias, sin las cuales no es posible impulsar una solución necesariamente costosa, necesariamente austera, de verdadera emergencia nacional; sólo el movimiento revolucionario está en condiciones de poder exigir a las masas el contentarse por largo tiempo con niveles de subsistencia, siempre que este sacrificio sea en beneficio de las mayorías populares y de que la carga de la reconstrucción nacional sea equitativamente repartida entre los diferentes sectores sociales.

f) Aunque el proceso ha demostrado hasta ahora que sin las fuerzas del movimiento revolucionario, sin su aquiescencia al menos, no puede resolverse el conflicto armado del país, quizá también puede concluirse que sin la aquiescencia de una buena parte de los sectores capitalistas y aun sin su presencia activa, al menos en el campo de la producción, tampoco sería viable la reconstrucción económica y tampoco sería gobernable el país. El capital en efecto ha sido un poderoso factor de desestabilización durante este período. Una parte de él ha sido responsable de la represión, uno de los elementos más desestabilizadores y más intolerables de todo el proceso; otra parte de él ha sido responsable, al menos, de que no prosperase esa llamada solución intermedia, al boicotear no sólo las medidas reformistas sino también el conjunto de la producción, allí donde no podían esperarse pronto y fáciles beneficios. No todo el capital ha seguido este doble camino de desestabilización, polarización y destrucción, pero sí una buena parte de él. Con lo cual tenemos una contraprueba del potencial del capital, no sólo para el desarrollo de la producción, sino

también para la lucha política—triunfo de ARENA, PCN— y aun para algunas formas de lucha armada. El capital salvadoreño no está dispuesto a abandonar sus posiciones, ni siquiera cuando el país entero se ha convertido en campo de batalla y cuando ha amenazado un avance importante de las fuerzas revolucionarias. Menos lo va a abandonar en tiempos más fáciles o que le puedan parecer más seguros; siempre contará con quien mire por su beneficio, quien le gestione sus negocios y quien ideologue sus intereses. Sin embargo, el capital tiene también que contar con que las cosas ya no pueden ser como lo eran con anterioridad al 15 de octubre. Al protagonista de los últimos decenios le ha salido un antagonista más fuerte que él y que le ha obligado a vender la soberanía patria para poderse mantener en su lugar de privilegio. El gran problema es cómo van a salir de su tensión el protagonista (el capital) y el antagonista (el movimiento revolucionario); pero como conclusión válida de estos años sale el que el antagonismo debe ser reducido al dejar ambas partes de lado sus extremismos más radicales. Esto no significa llegar a una solución intermedia estática, pero sí llegar a una transición dinámica, donde se logre un reacomodo de fuerzas, que responda a la nueva situación.

g) Los sectores civiles y democráticos, pertenecientes a los distintos estamentos sociales, no han jugado el papel que les corresponde para posibilitar una salida al conflicto actual. Esto se ha debido en parte a la militarización y polarización del conflicto. Es cierto que los sectores democráticos han jugado en ambos bandos un papel importante a veces, pero nunca hegemónico. Pero mientras en la alianza FA-DC, la DC iba perdiendo fuerza en beneficio de la FA, en la alianza FMLN-FDR, el FDR ha ido ganando fuerza sin que esto supusiera un debilitamiento del FMLN, aunque sí una moderación y una ampliación. Es evidente, la militarización del conflicto ha traído los males mayores al país y aquellos males que han desvirtuado más el proceso, pero esto mismo es la prueba de que los sectores democráticos y la democratización del país han tenido poca oportunidad. A mayor militarización menor democratización. No puede decirse que esa mayor democratización se haya dado con el proceso electoral y con la Asamblea Constituyente. Es cierto que hay nuevos partidos políticos en la palestra y que su acción empieza a ser mayor, pero de un modo totalmente insuficiente. Y, sin embargo, las elecciones han demostrado que hay un

alto potencial político en los partidos y en los procesos electorales, que hay un amplio espacio político, que no puede ser ocupado por organizaciones predominantemente militares.

h) Pero la conclusión fundamental del proceso del 15 de octubre es que la guerra ya ha dado de sí todo lo que debía dar y de que ha llegado la hora de terminar con ella. Lo cual no significa concluir de repente y de modo total con el poder de las armas, cosa de momento utópica, sino terminar con la guerra, porque la guerra ya no va a traer más que males al país y no se ve que con ella pueda resolverse el conflicto fundamental.

En la guerra se deben distinguir diversos estratos. Está el estrato de la existencia misma de dos ejércitos, uno el tradicional ya constituido y otro el revolucionario, que para la fecha puede considerarse como muy estructurado. Está, en segundo lugar, el estrato del enfrentamiento estrictamente armado, dado en acciones bélicas propiamente tales por más que se trate de una guerra irregular. Está, en tercer lugar, la labor de sabotaje estrictamente tal, llevada sobre todo o casi exclusivamente por el FMLN y cuyo propósito es tanto militar (detener y dispersar a la FA) como económico (estrangular el desarrollo de la producción). Está, en cuarto lugar, la represión casi totalmente en manos de la FA, de organismos paramilitares dependientes de ella y de escuadrones de la muerte, que a veces pueden operar con autonomía propia. Están, finalmente, las que pueden considerarse acciones de tipo terrorista de izquierda, cuyas víctimas son personas civiles no directamente involucradas en acciones estrictamente bélicas. No siempre es fácil distinguir cada uno de los estratos, pero se dan y es fundamental tenerlos en cuenta.

Los dos primeros estratos son difíciles de cambiar y no digamos de cambiar sustancialmente. Ni el FMLN está dispuesto a dejar su apoyo estrictamente militar, sus combatientes y milicianos, sus armas y sus posiciones, ni la FA está tampoco dispuesta a hacerlo. Tampoco es lo más fácil terminar el accionar estrictamente bélico de ofensivas y contraofensivas, aunque para esto ya hay una oferta por parte del FDR-FMLN, siempre rechazada por la FA, por el gobierno, por los partidos de derecha, pero sobre todo por Estados Unidos. Quien no quiere que termine la guerra, antes de la aniquilación o del debilitamiento sustancial de la guerrilla es, sobre todo, Estados Unidos. En un documento reciente, un cable enviado por el Departamento de Estado al

Embajador de Estados Unidos en El Salvador prescribiéndole lo que debe hacer para que el presidente Reagan pueda certificar el 28 de julio ante el Congreso de Estados Unidos, se da por supuesto que se debe conseguir a toda costa la continuidad de la ayuda militar norteamericana, porque de lo contrario el gobierno de El Salvador no podrá tener éxito en combatir la insurgencia (CAMINO, 1982). El documento en cuestión no sólo muestra un intervencionismo intolerable, sino que, muestra el principal interés norteamericano de acabar con la guerrilla como su propósito fundamental en todo lo que concierne a El Salvador. La prolongación de la guerra conviene de momento a Estados Unidos, pero no le conviene a El Salvador, ni siquiera le conviene a la FA ni al capital, que tarde o temprano tendrán que enfrentarse con el hecho de que esa guerra prolongada y sin éxito va a acabar con ellos y con el país. El aceptar esto supone que para El Salvador no hay una solución puramente política ni una solución puramente militar, la solución tiene que ser político-militar (Mayorga, 1981, p. 367-382; Ellacuría, 1981, d, p. 295-324; Leiken, 1982). El proceso lleva a esa conclusión y cuanto antes se acepte, más pronto podrá empezar la reconstrucción.

Hay otros dos estratos de la guerra que hacen más difícil la solución y que, sin embargo, parecerían en teoría más fáciles de resolver: la represión y el terrorismo de la izquierda. Son estratos muy distintos, porque lo que supone en uno de los lados elemento esencial de la estrategia —la represión—, supone en el otro un elemento muy derivado en la actual estrategia político-militar. En una negociación es presumible que el FMLN ofrecería gustosísimo el cese de toda forma de terrorismo estrictamente tal, con tal de que cesase toda forma de represión estrictamente tal. El documento del Departamento de Estado, al que nos acabamos de referir, da por sentado la existencia de esa represión como parte del proyecto militar de la FA y como algo difícil de cortar; pero insiste, por otra parte, en la necesidad de reducirla al mínimo porque resulta de difícil venta ante la opinión pública norteamericana. Mientras no se acabe con la represión se está concediendo que son miles los ciudadanos que prestan apoyo al FMLN y que pueden ser centenas de miles los que les apoyarían, caso de que cesase la represión. Mientras siga la represión, por tanto, no puede concluirse que el FMLN, y ya no digamos el FDR, no cuenten con

un fuerte apoyo popular actual y potencial.

Finalmente, está el estrato del sabotaje. Una parte de él, el estrictamente militar, será muy difícil de terminar mientras no termine la guerra. Más discutible y, por tanto, más negociable es el sabotaje de tipo económico, cuyas consecuencias no sólo las sufre el capital sino también el pueblo trabajador, que ve con malos ojos se le prive de fuentes de trabajo o de medios de transporte popular.

Era utópico pensar que las fuerzas en conflicto no iban a parar en una guerra. Pero, dada la experiencia de estos dos años y medio, es irracional seguir esperando de la guerra la solución del conflicto. Hay que acabar con la guerra y hay que acabar con ella no militarmente sino políticamente, esto, es por medio de diálogo, negociación u otro medio político. No es esto lo más conveniente para Estados Unidos y para su estrategia Este-Oeste, pero es lo más conveniente para El Salvador y para los salvadoreños. De lo contrario, la destrucción continuará, la violencia y la represión se perpetuarán, la economía no podrá levantar cabeza, la polarización y enemistad entre salvadoreños irá profundizándose, la deshumanización y desmoralización alcanzará límites abismales. Hablar de democratización, de respeto a los derechos humanos, de reconstrucción económica, de reformismo... todo ello es auto o hetero-engaño, mientras no se hable de finalización de la guerra. La finalización de la guerra permitirá democratización, reformas, reconstrucción económica, cese de la represión, respeto de los derechos humanos, reconfiguración del poder judicial, y no viceversa. Lo que en estos campos se pueda labrar será siempre poco y superficial, mientras sea la guerra el factor dominante de la política salvadoreña. No es que sean despreciables esas labores, pero serán de poco alcance, si es que realmente no se ataca el punto principal, terminar con la guerra. El Departamento de Estado, en el documento citado, apoya el progreso en la estructuración de un gobierno democrático, en concluir con la violencia indiscriminada contra la población civil, pero con tal de que esto sea bien recibido por los militares y no vaya en perjuicio de la "military effectiveness". Es decir, se busca la efectividad militar para acabar militarmente con la guerrilla y a eso se somete todo. He ahí la tesis norteamericana

que se ha mostrado trágica para El Salvador y que es necesario modificar en beneficio de los verdaderos intereses salvadoreños. La guerra, tal como hoy se está dando, no es desde luego la solución del problema salvadoreño, cosa admitida por todos, pero no es tampoco ni siquiera salida del conflicto actual. Así lo ha visto y proclamado públicamente el FDR-FMLN; así lo han afirmado los sectores más lúcidos de la Iglesia salvadoreña, especialmente Monseñor Rivera y Damas en repetidas homilias y declaraciones; así lo han visto México y Francia; así lo ha visto una gran mayoría en las Naciones Unidas; así lo ha visto la Internacional Socialista y la COPPAL; así lo reconoce una parte de la FA, de la DC y aun de otros partidos políticos... Quien sigue sin quererlo ver es la Administración Reagan, a pesar de que tantos congresistas se lo repiten una y otra vez. Y mientras la Administración Reagan no acepte terminar políticamente con la guerra, será muy difícil que la guerra termine y comience la reconstrucción nacional.

El 15 de octubre se encontró con un problema descomunal, el problema de El Salvador, un problema gestado y arrastrado durante decenas de años. El mismo fue resultado de este problema. Lejos de resolverlo, lo ha agudizado y lo ha agravado. Pero esta agudización y agravamiento han supuesto una aceleración de las soluciones. Se han despertado nuevos y poderosos dinamis-mos de solución, se ha logrado una profunda experiencia. Tal vez no sepamos bien qué se deba hacer, pero sí sabemos muy bien qué no se debe hacer para sacar al país adelante de esta crisis coyuntural y sobre todo de su gravísimo problema estructural. Tanto fracaso objetivo y, sobre todo, tanta sangre, tanto dolor humano, tanto heroísmo también, no pueden quedar en vano. Por otra parte, un problema de tal magnitud requiere la participación y, hasta cierto punto, el consenso de una gran parte de los salvadoreños y, desde luego, de las fuerzas sociales organizadas. La solución no puede reducirse a una solución de minorías y de vanguardias, tampoco a una solución puramente pragmática. El repaso acucioso de lo que ha ocurrido en estos dos años y medio y de los resultados a los que ha llevado debe ser una tarea cotidiana de las fuerzas políticas.